Juzgado Central de Instrucción
Número 5 - Audiencia Nacional

DPA 275/2008

AL JUZGADO

D. JAVIER FERNÁNDEZ ESTRADA, Procurador 561 de los Tribunales de Madrid y de la **Asociación Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) en els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC)**, según consta acreditado en el presente procedimiento, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Que evacuando el proveído de la resolución de este Juzgado de fecha 5.6.2013 y notificada este 6.6.2013, por medio del presente escrito venimos **a IMPUGNAR el recurso de reforma interpuesto** por la defensa del imputado Luis Bárcenas en contra de la providencia de este Juzgado de fecha 30.5.2013 por la cual se nos ha tenido por personados como acusación popular, impugnación que sustentamos en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Entendemos que el recurso del imputado debe ser desestimado *a limine* toda vez que, **en contra de una providencia como la del 30.5.2013 no cabe interponer recurso de reforma**, tal como se va a exponer a continuación.

En primer lugar, y según establece el artículo 245 de la L.O.P.J. se denominan providencias a aquellas resoluciones judiciales que tengan por objeto la mera ordenación material del procedimiento y, evidentemente, la recurrida en reforma cumple meridianamente con dicho objetivo.

En segundo lugar, no puede olvidarse que el recurso de apelación fue objeto de una importante reforma acometida por el legislador mediante la **LO 38/2002**. En ella se estableció que, en el ámbito propio del procedimiento abreviado, podía interponerse conforme dispone el art. 766 LECrim "*contra todos los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, que no estén exceptuados de recurso*". Es decir, contra los **AUTOS, NO LAS PROVIDENCIAS** como la que ahora se pretende recurrir.

El legislador de la Reforma 38/2002 de 24 octubre se refiriera a autos de los Jueces de instrucción y de lo penal y no a "resoluciones", precisamente, para impedir el riesgo de supuestos de abuso de la vía del recurso de apelación.

En consonancia con ello, la **CIRCULAR 1/1989 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, asimismo, estableció que los recursos admisibles durante la tramitación del procedimiento abreviado "**se dan sólo contra las resoluciones en forma de auto (...) en congruencia con lo también dispuesto como norma general en el art. 217 LECrim**", de manera que la ley "*lo único que pretende es que no se recurran las resoluciones que se limitan a ordenar el proceso...*", tal cual sucede en el caso que nos ocupa.

La Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, María Luzón Cánovas, afirmaba igualmente que: "*la providencia es considerada en el art. 141 LECrim. como una resolución judicial de mera tramitación, remitiéndose el art. 245,1 a) LOPJ a su objeto, que queda limitado a la*

ordenación material del proceso. No obstante su configuración legal, en ocasiones el contenido de la providencia excede de su carácter meramente instrumental, invadiendo el ámbito de resoluciones que, por su naturaleza, exigen una motivación y fundamentación expresas. En tales supuestos procede la admisión del recurso de reforma pues lo contrario, como señala la STC 349/1993 de 22 noviembre, supondría la vulneración del derecho de acceso a los recursos que protege el art. 24,1 CE porque bastaría adoptar dicha forma de providencia y no de auto para que contra tal resolución judicial no procediese la interposición de recurso alguno".

Visto desde esta perspectiva, resulta evidente que dar cuenta de una personación no es más que una resolución de mero trámite u ordenación del procedimiento que no conlleva otros pronunciamientos. Por ello, la forma a adoptar es la de la providencia en contra de la cual no cabe recurso de apelación y, por lógica procesal, mucho menos el de reforma. Motivo suficiente para desestimar el presente recurso ahora impugnado.

SEGUNDA: En el hipotético supuesto que se admitiera a trámite el recurso interpuesto por el representante del Sr. Bárcenas, consideramos que igualmente no procede estimarlo por los argumentos que a continuación exponaremos.

En primer lugar, porque en el escrito de la defensa no se tiene presente que existen otra serie de resoluciones, diferentes a las de 12 y 14 de marzo a las que hace mención en su alegación segunda, en que **el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid ya se tiene a esta parte por personada como acusación popular**, con dirección letrada y representación independiente (Ver **Documentos Probatorios 1 y 2 adjuntos**).

Se trata de resoluciones no impugnadas por el querellado recurrente.

No hay que olvidar, en ese sentido, que la parte recurrente no puede ir en contra de sus propios actos. Si no impugnó esas resoluciones, en verdad, mucho menos puede hacerlo ahora respecto de aquella de mero trámite que se limita a ordenar el procedimiento.

En conclusión este Juzgado ha usado acertadamente la forma de providencia porque no estamos más que ante un acto de mero trámite que trae causa de la resolución por la que se cursó la inhibición, no recurrida y que devino firme.

TERCERA.- Por el otro lado, el imputado recurrente pretende la imposición de una fianza a esta acusación para "responder de las resultas del juicio". A la vista de tal pretensión lo primero que cabe recordar es que a quien resulta más justificado imponerle una fianza no es otro que al imputado ahora recurrente a la vista de los indicios de criminalidad obrantes en el presente procedimiento contra él.

En todo caso, resulta evidente que la finalidad de la pretensión es imponer obstáculos materiales que no permitan ejercer el derecho reconocido constitucionalmente a la presente acusación popular.

No obstante, la parte ahora recurrente parece ignorar la singularidad procesal respecto a esta materia **del delito del artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General** que se le atribuye.

En efecto, en el **artículo 151 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General**, se establece de forma clara que la acusación

penal por estos delitos "**PODRÁ EJERCITARSE SIN NECESIDAD DE DEPÓSITO O FIANZA ALGUNA**".

Por otro lado, hay que señalar a efectos meramente retóricos que la imposición de una fianza a la acusación popular no es un requisito o exigencia ineludible y esencial del procedimiento que se tenga que adoptar en todos los supuestos, tal como pretende la defensa del Sr. Bárcenas. Resulta posible eludir la mencionada exigencia procesal atendida las circunstancias del caso en relación a la finalidad de la medida, de acuerdo con el artículo 274.2 LECrim. y el arte. 20.3 LOPJ y sin perjuicio de lo taxativo que resulta el ya citado artículo 151 de la Ley Electoral.

Ciertamente, la fianza establecida en el arte.280 de la LECrim se tiene que interpretar conjuntamente con el artículo 274.2 del mismo texto, y como freno a la acusación calumniosa o negligente. Así pues, en la actualidad, su finalidad es doble: intentar erigirse en freno de la acusación calumniosa, asegurando las responsabilidades en que suba incurrir el querellante mediante el desistimiento o renuncia de la querrela; y de otro lado, a través de ella, se intenta cubrir las posibles costas en las que el acusado puede incurrir como consecuencia de su maliciosa o negligente conducta. En el presente caso esta parte considera que resulta evidente que no nos encontramos ante los mencionados requisitos exigidos a la hora de permitir al Juzgador imponer una fianza.

En primer lugar, en el presente caso el interés en promover la actividad jurisdiccional resulta absolutamente digno y legítimo de amparo judicial sin que se pueda considerar por lo tanto una actuación fraudulenta o negligente falta de fundamentación fáctico-penal.

Y en segundo lugar, y más importante, porque los hechos se están instruyendo ya a resultas de las citadas querellas. Esta circunstancia elimina cualquier posible riesgo de una acusación infundada en el que se basa la exigencia de la fianza del artículo 280 LECrim. y además significa que el querellante en vez de iniciar el proceso, se adhiere a él. En este sentido, hay que recordar que la jurisprudencia ha determinado la exclusión de las querellas adhesivas de la obligación del pago de fianza (STS de 3 de junio de 1995).

CUARTA: La defensa del imputado interesa, asimismo, que se acuerde la obligación de litigar bajo una misma dirección técnica y de representación a las acusaciones populares. Se considera que, en caso contrario, podría afectarse a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

En primer lugar, y a la vista de tal petición, debe recordarse que es el propio recurrente quien retarda indebidamente el presente proceso con medios impugnatorios inexistentes que entran en contradicción con sus propios y anteriores actos.

En segundo lugar, hay que recordar que el Sindicato Manos Limpias presentó una denuncia pero **FUE ESTA ACUSACIÓN LA PRIMERA QUE SE QUERELLÓ CONTRA EL SR. BÁRCENAS POR LOS HECHOS CONTENIDOS EN SU QUERELLA**. A tenor de los hechos denunciados, no obstante, la competencia recayó en los Juzgados de Plaza de Castilla y, por diversas vicisitudes procesales, ahora se tramita en las presentes diligencias previas. **RESULTARÍA, ASÍ, PARADÓJICO E INJUSTO QUE TUVIERA RENUNCIAR A SU DIRECCIÓN LETRADA Y REPRESENTACIÓN EN BENEFICIO DE**

ACUSACIONES QUE ACTUARON CON POSTERIORIDAD A ELLA.

En tercer lugar, **NO EXISTE UNA CONVERGENCIA DE INTERESES ENTRE LAS ACUSACIONES POPULARES PERSONADAS.** Y este es, precisamente, el presupuesto esencial previsto en el artículo 113 LECrim, puesto que tal como establece el Tribunal Constitucional en la Sentencia 154/1997:

“La facultad de apreciación contenida al artículo 113 LECrim no puede entenderse cómo enteramente discrecional, puesto que tendrá que tener presente los dos principios constitucionales que tienen que ser conciliados: el derecho a la defensa y asistencia letrada y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. De aquí que el presupuesto jurídico indeterminado “si fuera posible” tenga que traducirse en algo más que una necesaria ausencia de incompatibilidad entre las diferentes partes que ejerciten la acción penal o civil derivada del delito -requisito mínimo-; es precisa una suficiente convergencia de intereses, e incluso de puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actas realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas. En otro caso, es forzoso reconocer que se produciría una merma del derecho de defensa ante los Tribunales que difícilmente se justificaría por motivos de economía procesal, lógicamente de inferior rango en una escalera axiológica de los principios procesales, a la cual, por otro lado, puede atenderse por medios de menor trascendencia, como son la valoración en cada caso concreto de la pertenencia de aquello solicitado por cada una de las partes o el otorgamiento de plazos comunes para el alegaciones”.

En el presente caso, a pesar de que, aparentemente, puede existir una clara vocación de que “se haga justicia” por parte de las acusaciones populares (cómo es normal en todos los casos de acusación popular), en las acciones no hay un único objeto y legitimación común que justifique la acumulación.

La doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar y aplicar el artículo 113 LeCrim. establece los elementos objetivos que hay que tener en cuenta. Entre ellos, destaca la identidad de los hechos denunciados, persona contra la cual se dirige la acción penal e, incluso, la calificación jurídica de la conducta enjuiciada. De la simple lectura de las diferentes acciones penales, se desprende que **EXISTE UNA CLARA DIFERENCIACIÓN DE PERSONAS IMPUTADAS Y TIPOS PENALES.**

La parte ahora recurrente, sin duda, realiza una interpretación sesgada de la doctrina invocada. Y claramente restrictiva del ejercicio de la acción popular reconocida al artículo 125 de la Constitución como medio de acceso a la jurisdicción (STC 241/1992, de 21 de diciembre), contraviniendo la propia doctrina constitucional establecida ya desde la STC 62/1983.

En el presente caso, en definitiva, por las razones esgrimidas anteriormente la medida interesada no es ni justificable ni proporcionada. De acordarse, se vulneraría el derecho de defensa y asistencia letrada que consagra el artículo 24.2 CE. En efecto, obligar a acumular la presente acusación popular a otras personadas en el procedimiento implicaría perder la capacidad efectiva de actuar en nombre de los intereses de la propia

asociación y ello afectaría a su derecho a la defensa de los mismos ante los Tribunales, en contra del *principio pro actione* que rige en el ámbito del derecho al acceso a la jurisdicción.

Por todo ello,

SOLICITO: Que se admita el presente escrito a trámite y, conforme al mismo, se tenga por evacuado **ESCRITO DE IMPUGNACIÓN** contra el citado recurso de reforma contra de la providencia de este Juzgado de fecha 30.5.2013 por la cual se nos ha tenido por personados como acusación popular, de tal forma que se mantenga la misma en toda su integridad.

Por ser de Justicia que pido en Madrid, 9 de junio del 2013

Javier Fernández Estrada
Procurador